

México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. La última década estuvo signada por el asesinato, la desaparición, la tortura y el secuestro de una centena de comunicadores a lo largo de todo el país. El Estado es señalado una y otra vez como cómplice en una trama compleja atravesada por el narcotráfico. De la ultraviolencia a los narcomensajes, mapa actual de un territorio caliente.

texto **Guíomar Rovira Sancho**
foto **Oscar Canceco Martínez**

De 2000 a marzo de 2012, la organización internacional ARTICLE 19 documentó 71 asesinatos y 13 desapariciones de comunicadores en México. De mayo a junio, fueron 6 los periodistas asesinados. Sólo durante 2011, se registraron 174 agresiones en contra del ejercicio de la libertad de prensa, por ende, de la libertad de expresión, que incluyen amenazas, destrucción del equipo, intimidaciones, agresiones físicas, detenciones arbitrarias e ilegales, incomunicación, torturas, asesinatos, desapariciones y todas las variantes del secuestro.

En México, ejercer el periodismo se resumía en una frase "o plomo o plata". Sin embargo, de eso se pasó al "silencio o plomo": ya no hay prebendas, solo callar puede salvar la vida de muchos comunicadores. Y en el mapa se pueden trazar los amplios "bolsones de silencio", zonas del país de las que no se informa nada, no se sabe nada.

El Partido Revolucionario Institucional, en el poder durante 7 décadas, implementó una relación de sumisión de los medios al poder político. No sólo el Estado tenía el monopolio de la venta de papel a los periódicos, sino que ejercía control directo sobre sus contenidos a través de lo que se conoce como "la pluma cuata" (la pluma amiga), el "chayote" (el pago que recibe el periodista por una cobertura favorable) y los convenios de publicidad oficial, gracias a los cuales todavía hoy sobreviven la mayoría de los medios impresos del país.

Con la alternancia política, cuando el PRI fue desbancado por el Partido de Acción Nacional (PAN) en el 2000, parecía que las condiciones habían cambiado. Ya desde el



REPUDIO TOTAL

NI UNO MENOS



4 de mayo de 2012
Segunda protesta de periodistas en la
Representación del Estado de Veracruz.

levantamiento zapatista de 1994, los medios de comunicación se habían visto obligados a responder a los intereses de la ciudadanía. Las nuevas generaciones de periodistas incursionaban en la profesión con una buena formación y con voluntad crítica, prestos a desarrollar las técnicas del nuevo periodismo y de la investigación rigurosa.

Pero este momento de apertura fue paradójico: aumentó la libertad de expresión a la vez que lo hacía la forma más extrema de censura: el asesinato, la desaparición, la tortura y el secuestro de comunicadores. Y ha sido durante el sexenio del actual presidente Felipe Calderón, del PAN, que las agresiones a los periodistas han alcanzado grados de alarma: México es el país más peligroso de América Latina e incluso del mundo para ejercer el periodismo.

"Cuando estamos hablando de que hay 71 periodistas asesinados, deberíamos preguntarnos qué información fue la que a la sociedad se le negó conocer", explica Ricardo Martínez, abogado de ARTICLE 19. El problema es la colusión entre delinquentes y estructuras de gobierno corruptas. No en vano el informe publicado en marzo de 2012

por ARTICLE 19 lleva el título: "Silencio forzado: El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México" y documenta que el 65% de las agresiones han sido cometidas por autoridades.

Martínez pone por ejemplo el caso de Alfredo Jiménez, periodista que desde hace cuatro años no ha dado señales de vida: "Desapareció la semana después de que publicara los nombres de los funcionarios del gobierno de Sonora probablemente implicados." Otro caso trágico es el de Armando Jiménez, reportero de *El Diario de Juárez*, asesinado en Ciudad Juárez frente a su mujer y a su hija de ocho años. Él era un veterano de la fuente policíaca; un año antes de su asesinato empezó a enfocar su trabajo periodístico en la corrupción de las policías locales y estatales.

La reportera Anabel Hernández, autora del libro *Los señores del narco*, puntualiza: "El narcotráfico en México también está integrado por una amplia red conformada por funcionarios públicos de muy alto nivel, muchos de los cuales, irónicamente, son los responsables de combatir el crimen".

En el 98% de las agresiones a periodistas

no se ha hecho justicia: ninguno de los responsables, ni materiales ni instigadores, han sido presentados ante un juez. En la mayoría, no hay diligencias ni se ha protegido la evidencia. Las omisiones más graves están en los casos de periodistas desaparecidos.

La indefensión ha llevado al exilio, a la migración o al abandono del oficio. Ricardo Chávez, reportero de Radio Cañón de Ciudad Juárez, cruzó la frontera con Estados Unidos y consiguió visa humanitaria después de que sus dos sobrinos fueran asesinados. Lo mismo hizo a principios de 2009 Jorge Aguirre, director de la revista electrónica *La Polaka*, de Ciudad Juárez, tras recibir amenazas de muerte. En 2008 los reporteros Emilio Gutiérrez, del Diario del Noroeste en Sinaloa, y Horacio Nájera, corresponsal en Ciudad Juárez del diario Reforma iniciaron ese camino.

Tamaulipas es un estado emblemático: los medios locales están prácticamente contra la pared. Sucesos de interés público, ya sea relacionados con el crimen organizado o con la vida política del Estado, no aparecen en los periódicos. Ocurre además que cuando medios de cobertura nacional como la revista

Proceso publican información referente a la zona, la edición completa desaparece de los puestos de venta: todos los ejemplares son comprados o incautados en el aeropuerto. Acaba de ocurrir de nuevo con las ediciones de Proceso que muestran en portada la compra de votos en las elecciones.

Internet y las redes sociales se ha convertido en el espacio donde los ciudadanos se informan o incluso donde los periodistas escriben lo que no pueden publicar. Así, la gente recurre a Twitter o Facebook para saber qué ruta tomar para ir a casa, cómo evitar una "balacera" o un retén militar. Sin embargo, la criminalización y la violencia también llega al ciberespacio. Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo fueron detenidos en Veracruz el 25 de agosto del 2011 acusados de terrorismo por publicar en Twitter y Facebook comentarios sobre una supuesta situación de alarma en la ciudad. En Tamaulipas, María Elizabeth Macías Castro, moderadora del sitio Nuevo Laredo en Vivo, fue asesinada por el narco el 9 de noviembre de 2011, tras recibir amenazas de que no continuara con su blog.

Se da el caso de que algunos acceden a trabajar para intereses de terceros. Se habla de "narcoperiodistas", correas de transmisión entre los cárteles y los medios, que cobran jugosos sueldos por someterse a las estrategias de comunicación que les dictan, pero que son los primeros a los que los cárteles rivales asesinan si toman la plaza.

La letra sin ley

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que responsabiliza a las autoridades de proteger a quienes corren riesgos en estas labores, fue aprobada recién en abril de 2012. Desde el 15 de febrero de 2006 existe la Fiscalía de Atención para Delitos en contra de la Libertad de Expresión, supeditada a la Procuraduría General de la República. El 17 de julio, en una sesión parlamentaria se cuestionó su eficacia, pues no hay una sola sentencia por agresiones a periodistas, a pesar de que se reformó el artículo 73 constitucional para que la autoridad federal pudiera atraer estos delitos.

Regina Martínez, corresponsal en el estado de Veracruz de *Proceso*, el mayor semanario de investigación del país, fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio de Xalapa. Como no hubo arma homicida, sino que fue estrangulada, la Fiscalía no ha atraído el caso y actúa como una observadora más de las investigaciones de la fiscalía local. Supuestamente, Regina Martínez estaba investigando la colusión de policías y un candidato a diputado del PRI con el narcotráfico cuando fue asesinada.

También se creó un organismo de protección a periodistas dentro de la Secretaría de Gobernación que dispuso en 2011 de 25 millones de pesos para medidas de protec-



Dolor y miedo al por mayor: son más de 60 mil los muertos en los últimos 6 años

ción. Martínez, como miembro de ARTICLE 19, explica: "En el momento en que solicitamos todos los recibos y todas las cuentas respecto a cómo se habían gastado el dinero, lo que encontramos es un subejercicio tremendo: solamente se gastaron 800 mil de los 25 millones de pesos, a pesar de que se produjeron 174 agresiones en contra de periodistas". Y de estos 800 mil, prácticamente la totalidad del dinero (780 mil pesos, más o menos) se destinó a costos administrativos: viajes, comidas, sueldos. "¿Saben cuánto se gastó en proteger? Solamente 22 mil pesos para la familia de un reportero asesinado en Sinaloa", expone con indignación.

La violencia sacude principalmente a los periodistas de los estados de la República. El Distrito Federal es una isla a la que van a parar muchos periodistas que huyen de sus ciudades. Daniela Pastrana como miembro de la *Red de Periodistas de a Pie* viaja por todo el país organizando reuniones y talleres con los reporteros locales. Pastrana explica la situación de explotación e indefensión de

sus colegas: "un periodista en los estados es como el hilo más débil, gana unos 4 mil pesos, o máximo 5 mil (350 a 450 dólares al mes, sin prestaciones, sin seguro médico ni de vida)", explica.

En 2008, cuando asesinaron a Armando Rodríguez en Ciudad Juárez, la organización *Periodistas de a Pie*, que había iniciado sólo en la capital, decidió tejer una red nacional. "La situación se volvió insostenible cuando secuestraron a los colegas de Televisa y de *Milenio* en 2010. Acabábamos de hacer un foro de periodistas de los estados que se llamaba *Ni uno menos*. Hicimos una reunión con 60 periodistas que fue como catarsis, cada quien dijo qué estaba pasando en su estado, pero no definimos nada más. Cuando secuestran a estos colegas, entonces sí empezamos a utilizar una cosa, que todavía seguimos usando, que era un hashtag en Twitter, que era *#LosTresMotivos*, y que después de eso se convirtió en una marcha. De ahí para acá cambió totalmente el giro de la organización y el trabajo que hemos estado haciendo, que cada vez es más desbordado porque los colegas nos ven con confianza, a diferencia de otras organizaciones gremiales que estaban igualmente viciadas con esta relación tan perversa que hay de control de los medios". Daniela Pastrana y la Red no dan abasto: "A lo máximo que hemos llegado, con el apoyo de muchas organizaciones, es a saber quiénes eran estos muertos: cómo se llamaban, dónde trabajaban, cuál era su nombre. Pero no sabemos qué estaban publicando.



izquierda

29 de abril de 2012

Primera Protesta de Periodistas llevada a cabo en la sede de la Representación del Estado de Veracruz.

arriba

5 de mayo de 2012

Ofrenda en el Angel de la Independencia, Ciudad de México, Tercera Protesta de Periodistas.

Son muchas las mujeres reporteras que se enfrentan a esta situación publicando y actuando. Marcela Turatti, miembro de la Red, ha publicado el libro de crónicas *Fuego Cruzado*, donde retrata las consecuencias sociales de la violencia: el estrés postraumático de los comunicadores, las heridas abiertas que deja el crimen en las poblaciones: viudas, huérfanos, desplazados, heridos, mutilados, gente incapaz de retomar la normalidad, montañas de dolor y de miedo que se esparcen alrededor de cada uno de los más de 60 mil muertos de los últimos 6 años.

Red de protección

La tragedia mexicana tiene un ingrediente más. Los cárteles han aprendido a manejar los medios para sus fines. La ultraviolencia y los narcomensajes son formas de comunicar aquello que les interesa y que responde a códigos soterrados. Muchas veces ni los reporteros ni la ciudadanía entiende, pero a través de los cuerpos desmembrados se delata a rivales, se acusa a cárteles enemigos de salvajismo, se expone

11 de septiembre de 2011

Marcha de periodistas por el asesinato de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, realizada desde el Angel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación.



a funcionarios corruptos comprados por cárteles de la competencia, se manda mensajes que buscan influir en la opinión pública y se siembra un terror paralizante.

Jaime Muñoz Vargas, escritor y periodista de Durango, explica la evolución de esta tragedia: "Lo primero que desapareció fue la firma de los reporteros. En vez de que las notas fueran signadas por fulano de tal, los periódicos optaron, para bien, por protegerlos y comenzaron a firmar "Por la Redacción". Luego, en el difuso tragin de los grupos violentos, algunos medios y periodistas recibieron amenazas. Un grupo u otro, daba lo mismo, ordenaban que tal o cual nota no saliera o lo contrario, que apareciera con todas sus letras. Como los informadores quedaron en medio de la siniestra rebatinga por el poder, algunos medios decidieron no acceder a las presiones y continuaron defendiendo su independencia. Después, casi de inmediato, no hubo medio que de alguna manera no fuera atacado, o al menos rozado, por la agresión directa."

Una granada impactó contra la fachada del diario *El Mañana*, de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, el pasado 11 de mayo. El periódico *El Norte*, en Nuevo León, registró dos ataques similares contra sus oficinas. El 10 de julio de 2012, de nuevo una explosión destruyó parte del edificio de *El Mañana*, cuyo editor Roberto Mora fue asesinado en 2004. Ese mismo día otras granadas impactaron contra las oficinas de *La Silla*, suplemento del periódico *El Nor-*

te de Monterrey, y de la publicación *Linda Vista*, también de *El Norte*, en el municipio de Guadalupe. *El Norte* ya había sufrido tres atentados –ninguno esclarecido– el 20 de septiembre de 2010, el 10 de enero y el 31 de marzo de 2011.

La editorial de *El Mañana* del día 13 de mayo de 2012 afirma: "...este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufren nuestra ciudad y otras regiones del país."

En mayo, en un evento contra la violencia a los periodistas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Anabel Hernández expresa su indignación: "Los cárteles de la droga y el gobierno son responsables de la muerte de los periodistas. Pero hay un tercer actor, un cómplice silencioso de todos estos homicidios, que son los medios de comunicación. Son los jefes de redacción, son los directores de los periódicos, son los dueños de los medios a los que les ha importado nada que se maten a los periodistas de sus redacciones." Daniela Pastrana añade que ella ha constatado que en muchos casos los periodistas que reciben amenazas son inmediatamente despedidos de sus medios, sus directores no quieren problemas.

Actualmente, los jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicación de la UAM dicen que sus madres no quieren que sean periodistas, como evidencia de un miedo que se derrama ya en todo los sectores.